

lo decretó y firmó, por ante mí el Secretario, de lo que doy fé.—*Lic. F. Valdés Gómez.*—*Pablo Borrego*, secretario.

Es copia que certifico. Monterrey, Agosto 4 de 1874.—*Pablo Borrego*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 19 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Nuevo Leon, por el C. T. Rodriguez en representacion de su hijo Austacio del mismo apellido, contra los actos del Alcalde 1º de Linares, que lo juzgó y sentenció á la última pena conforme á la ley de 3 de Mayo de 1873 relativa á salteadores y plagiaros; vista la sentencia del Juez de Distrito que negó el amparo y las demas constancias que obran en autos, se decretar:

Que es de confirmarse y se confirma, por sus propios legales fundamentos, la sentencia pronunciada en 6 de Agosto del presente año, por el Juez de Distrito de Nuevo Leon, cuya parte resolutive dice:

Que la Justicia federal no ampara ni protege á Austacio Rodriguez, contra los actos del C. Alcalde 1º de Linares que lo juzgó y sentenció á la última pena.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio María Altamirano.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Landa*, oficial mayor.

Es copia que certifico. México, Noviembre 5 de 1874.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de México por el C. Manuel Terreros, contra el C. Administrador de Rentas del Distrito de Cuauhtitlan, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que juzgó conveniente que siguiera el juicio promovido por el C. Manuel Terreros, porque el escrito en que solicitó el amparo está arreglado á derecho, y por que se alegó la violacion de algunas garantías consignadas en la Constitucion general; reservándose pedir en el alegato lo que estimara justo con vista de las pruebas que se rindieron, las cuales algunas veces hacen variar el concepto que se forma á la iniciacion de un negocio.

Es llegado el caso y sin embargo debe hacerlo sin mas datos que los que tuvo cuando contestó el traslado de tres dias, porque el Juzgado estimó que no habia necesidad de prueba y el peticionario estuvo conforme.

Así es que, el que habla emitirá el juicio que formó cuando el negocio se inició, el cual creyó estaba sugeto á variacion y pedirá lo que corresponda en derecho.

El procedimiento de que se queja el C. Manuel Terreros, no importa la violacion de una ó mas garantías, primero, porque el artículo 124 de la Constitucion federal, tal cual está redactado, y en el estado que las cosas se conservan hace 17 años, no contiene garantía alguna, y por consiguiente hubo competencia en el empleado de Hacienda que ejecutó el acto reclamado; segundo, porque como lo confiesa el promovente, la garantía del artículo 4º es, salva la facultad del Gobierno, de pedir al individuo una parte de los productos de su trabajo por via de impuesto, así como la del 27 reconoce por limitacion el impuesto.

Bajo este concepto el que suscribe, con

fundamento del artículo 101 de la Constitución federal de la República, y ley orgánica del mismo, pide al Juzgado se sirva declarar que la Justicia de la Unión no ampara ni protege al C. Manuel Terreros, contra la providencia dictada por el C. Administrador de Rentas de Cuautitlan, en virtud de la cual le fueron embargados cuatro bueyes de trabajo.

Toluca, Agosto 14 de 1874.—Cevallos.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Toluca, Agosto 29 de 1874 —Visto en lo general este juicio promovido por el C. Manuel Terreros, Diputado á la Legislatura del Estado, y con especialidad su ocurso de 24 de Julio último, en el que solicita que la Justicia de la Unión lo ampare y proteja contra la providencia dictada por el C. Administrador de Rentas de Cuautitlan, en virtud de la cual el guarda C. Juan Guerrero pasó á la Hacienda de Jalpa de la propiedad del citado C. Terreros, requirió de pago á su dependiente C. José Guerrero por la cantidad de \$ 12 55 ctvs. de alcabala, derecho municipal y 25 p^{cs}. federal, embargando y llevándose consigo cuatro bueyes de labranza; por que el dependiente de la Hacienda rehusó hacer el pago, no obstante la iguala y las leyes relativas del Estado.

Visto así mismo, el informe producido por el citado C. Administrador, y visto por último lo pedido por el representante del Ministerio público; y teniendo en consideración que el art. 124 de la Constitución federal, hace 17 años que fué promulgado, sin que no obstante el largo transcurso de ese tiempo, hayan dejado de cobrar casi en toda la Nación las alcabalas, con el consentimiento tácito y en algunos casos casi expreso, de los Poderes generales Ejecutivo y Legislativo; que no se han decretado, á pesar del artículo constitucional y del largo período de los 17 años mencionados, los impuestos que deben sustituir á la alcabala; que de

los términos en que está concebido el citado artículo 124, se deduce, como lo creyó la Suprema Corte de Justicia, en el superior fallo pronunciado el 31 de Mayo de 1873, en el juicio de amparo promovido por el C. Ramon Pimentel, ante el Juzgado de Distrito de Querétaro contra el C. Administrador principal de Rentas, que embargó 14 fanegas de maíz, por haberse introducido este sin pagar alcabala; que dicho artículo supone como condicion natural, el previo establecimiento de los impuestos que deben reemplazar á las alcabalas, así como la previa promulgacion de las leyes conducentes á hacer efectivo lo preceptuado por el artículo constitucional mencionado; sobre lo que es de tenerse presente, que al hacerse la iguala, se renunció voluntariamente, toda vez que no se hizo uso de ningún derecho, dicha garantía, aun para el caso de que por haber tenido su verificativo las condiciones, fuese ya tiempo de acogerse á ella, en cuyo caso la garantía que envuelve, no puede decirse violada sino hasta que se llenen esas condiciones, así como tampoco las garantías que otorgan los artículos 4º, 16 y 27, toda vez que, [subsistiendo como legalmente subsisten las alcabalas, porque á virtud de no haber sustituido con otros impuestos, aun no ha llegado el tiempo fijado tácitamente para su abolicion, lo que sucederá hasta que se verifique la condicion que entraña el repetido artículo 124.]

1º: Es competente el Estado de México, y obra legalmente y en la órbita de sus facultades, dictando leyes para el pago de alcabala, porque no infringe la Constitución ni limita la libertad individual en la persona ó propiedad, en la parte que ya no esté limitada por el pacto federal.

2º: Es competente tambien el C. Administrador de Rentas de Cuautitlan, para cobrarla y ejercitar la facultad económico-coactiva.

3º: La cobra en virtud de la limitacion que el promovente reconoce como justa, respecto del derecho de ejercer la industria ó

trabajo honesto que al hombre le acomode, y aprovechase de sus productos, y del que no pueda su propiedad ser ocupada sin su consentimiento; lo alegado por el C. Promotor fiscal de Hacienda, y todo lo demás que considera y ver convino, la Justicia de la Union con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion general de la República, y con apoyo de la ley reglamentaria de 20 de Enero de 1869, declara: que no ampara ni protege al C. Manuel Terreros, contra la providencia dictada por el C. Administrador de Rentas de Cuautitlan, en virtud de la cual cobró \$ 12 55 ctvs. de alcabala, derecho municipal y 25 p^o federal y embargó en la Hacienda de Jalpa cuatro bueyes de labranza.

Hágase saber; exíjase á la parte el papel necesario para reponer el en que se actúa por falta del que corresponde; publíquese este fallo por los periódicos y "Semanario Judicial, y fecho, elévese á la Suprema Corte de Justicia, para la revision de este auto.

El C. Lic. Ramon Ortigosa, Juez de Distrito en este Estado, definitivamente juzgando, lo sentenció y firmó. Doy fé — *Ramon Ortigosa.*— *Vicente Landa*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, 22 de Octubre de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido por el C. Manuel Terreros, ante el Juzgado de Distrito del Estado de México, contra el C. Administrador de rentas del Distrito de Cuautitlan, que le cobra una cantidad como asignacion á la hacienda de Jalpa, por sus productos, y contra el embargo que el mismo Administrador mandó practicar en unos bueyes de labranza, en virtud de la resistencia al pago de dicho impuesto, con cuyo acto cree el quejoso se infringe el artículo 124 constitucional.

Visto el informe de la autoridad responsable del acto reclamado; el pedimento del

C. Promotor fiscal; lo alegado por el promovente; la sentencia del inferior, negando el amparo, y cuanto mas de autos consta y se tuvo presente.

Considerando: que el artículo constitucional citado, que prescribió la abolicion de las alcabalas y aduanas interiores de la República, supone, como condicion natural, el previo establecimiento de los impuestos necesarios para organizar la Hacienda pública, reemplazando las alcabalas y la expedicion de la ley ó leyes indispensables para hacer efectiva la prevencion constitucional, la cual en consecuencia, no puede considerarse violada, mientras no se llenen esas condiciones.

Por estos fundamentos, se declara: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada en 29 de Agosto último, por el C. Juez de Distrito del Estado de México, que declaró: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Manuel Terreros, contra la providencia dictada por el C. Administrador de Rentas de Cuautitlan, en virtud de la cual cobró doce pesos cincuenta y cinco centavos de alcabala, derecho municipal, y veinticinco por ciento federal y embargo en la hacienda de Jalpa cuatro bueyes de labranza.

Devuélvase estas actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, archivándose á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Miguel Anza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, 4 de Octubre de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.